

## **EPR, Estado y sociedad**

**José Luis Piñeyro**

**21 de julio de 2007**

Diversos analistas han afirmado o dudado de la autoría del EPR respecto de los atentados a los gasoductos de Pemex; lo cierto es que el EPR ha reiterado tal autoría. No repetiré los argumentos de quienes a partir de la historia, estrategia y comunicados recientes eperristas vieron congruencia o contradicciones en tales acciones, sino que recuperaré algunas conclusiones de mi ensayo ("Fuerzas Armadas y contraguerrilla rural en México: pasado y presente", Nueva Antropología No. 65, 2005) sobre los porqués del difícil avance social y territorial de la insurgencia armada rural.

En primer lugar mencionaba el divisionismo persistente entre los comandos guerrilleros y a su interior; el predominio del voluntarismo militarista y el reducido trabajo entre el pueblo; el dogmatismo teórico al interpretar la realidad nacional y la estrategia militar; el sectarismo frente a otras guerrillas y organizaciones de masas y partidarias; las rígidas actitudes verticales de la dirigencia con la base armada, según revelaron guerrilleros escindidos del EPR.

La segunda limitante era la mayor capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas (FA) en el tiempo y el espacio nacional: mejor coordinación de Defensa y Marina, entrenamiento, armamento y transporte aéreo y terrestre; más grupos de fuerzas especiales, superior mecanismo de inteligencia, más y mejores carreteras y mayor colaboración con las policías federales, estatales y municipales.

La tercera restricción al accionar armado campesino era el pasivo estado de ánimo popular y sus desastrosas condiciones de vida producto del capitalismo neoliberal: depauperación salarial, desempleo y subempleo, economía informal y criminal, y los patrones de supervivencia y delincuenciales, más actitudes individualistas de rompimiento de la solidaridad comunal y ejidal y de barrio, de desgarramiento del tejido social. A este producto natural del capitalismo se agrega "lo artificial": la voluntad gubernamental o caciquil de mantener la disgregación social como forma de dominación estatal vía la cooptación con programas antipobreza, el estímulo enfrentamiento intercomunitario campesino e indígena, la violencia selectiva y sistemática; medidas que varían de región a región y de tiempo político a tiempo electoral.

Hoy, sin embargo, las tres limitantes mencionadas se han revertido al menos parcialmente. Los informes de inteligencia destacan la muy probable unificación de los comandos guerrilleros a pesar de las diferencias tácticas dada la crítica situación de violación a los derechos humanos —como publicó Amnistía Internacional— y la tendencia gubernamental a la criminalización de la protesta social, y el reciente arresto y desaparición de dos dirigentes del EPR.

Además, la mejor coordinación de inteligencia de las FA con las policías federales, estatales y municipales muestra fisuras. Las explosiones del EPR indican mayor movilización geográfica al salir de Guerrero y Oaxaca y actuar en Guanajuato y Querétaro, superior capacidad técnica bélica con detonaciones simultáneas y una base de apoyo social en estos estados.

Asimismo, el ánimo popular de pasividad no es el mismo después de diversos conflictos como los de Atenco y Oaxaca, y sobre todo de la cuestionada elección presidencial que a un año de distancia más de 40% de la población no la considera legítima, para no mencionar procesos más estructurales que provocan profunda irritación como la "exportación" sexenal de 3.2 millones de migrantes con la secuela de desintegración familiar y cientos de muertos y heridos en la frontera, así como la persistencia de la pobreza, el desempleo y la inseguridad pública que avanzan o al menos se mantienen y que como candidato presidencial Calderón prometió combatir a fondo.

Al gobierno de Calderón le interesa, dentro de límites funcionales, reconstruir el destrozado tejido social y la desestructuración de las identidades colectivas antes aludidas. Corresponde a las fuerzas democráticas y progresistas la principal labor de reconstrucción y al gobierno nacional enfrentar a la oposición armada con la presentación de los dos dirigentes desaparecidos y una amnistía general para los comandos guerrilleros.

Desactivar los focos armados es posible; iniciar un desarrollo económico regional y nacional incluyente es tarea de la sociedad civil mayoritaria y de ciertas agrupaciones partidarias y sindicales. Si no sucede este cambio gubernamental y político, sea neutralizada o eliminada la guerrilla rural, en pocos años regresaremos al círculo vicioso que Carlos Montemayor llama la guerrilla recurrente. Se requiere un pacto nacional que desactive el campo minado, reactive la economía y democratice al Estado.

jlpineyro@aol.com

Profesor investigador de la UAM-A